



COMUNICACIÓN

LA AGRICULTURA VALENCIANA

Joan Brusca Beltrán
Secretario General de la Unió de Llauradors i Ramaders

En los últimos años, el sector agrario valenciano ha tenido que afrontar, importantes transformaciones que han modificado profundamente la estructura y el funcionamiento del mismo, en nuestra Comunidad Autónoma, especialmente desde nuestra entrada en la actual Unión Europea.

Nuestra entrada en la UE con estas transformaciones, ha tenido efectos positivos pero también ha tenido muchos negativos, ya que de una agricultura prácticamente más tradicional y de subsistencia, hemos pasado a la competencia del mercado y a unas políticas agrarias marcadas por la propia Unió Europea y que nos ha obligado a hacer frente a una brutal reconversión, con un gran sacrificio ya que en este proceso los que más hemos pagado este cambio en la economía mundial, somos los agricultores y los ganaderos y la realidad es que nos ha costado muy caro , ya que muchos de nuestros compañeros se han visto obligados a abandonar su profesión.

Si los condicionamientos externos son motivo de preocupación, no menos lo son los internos. Por una parte nos encontramos ante una serie de graves carencias estructurales que impiden desde hace mucho tiempo la competitividad del sector agrario valenciano y que además hipotecan gravemente su futuro.

Entre otras hay que destacar:

El excesivo minifudismo, dentro de esta escasa dimensión de las explotaciones resalta el dato de que el 50% de estas tienen menos de 1 Ha. Si a esto le añadimos un elevado índice de parcelación, con una media de cuatro parcelas por explotación, marcos de plantación inadecuados que en muchos casos impiden la mecanización de las explotaciones y un

consumo intensivo de inputs, nos encontramos con un problema generalizado de costes que presionan a la baja los márgenes para el productor.

En los sectores ganaderos, por su parte, nos enfrentamos con unas explotaciones con una media de antigüedad de más de treinta años, con unas instalaciones bastante obsoletas en la mayoría de los casos que requieren acometer un proceso de modernización, una situación ilegal en la mayoría de las explotaciones que impide que estas necesarias reformas se produzcan y con una cabaña ganadera por explotación muy por debajo de la media europea. Por otra parte el predominio de la fórmula de integración vertical en las producciones avícolas y de porcino que convierte la situación en un oligopolio por parte de las empresas comercializadoras e industrializadoras, además de la indefensión absoluta en que quedan los productores.

La falta de movilidad del mercado de la tierra, con la consiguiente dificultad de los agricultores de aumentar su base territorial y conseguir una mayor concentración parcelaria es consecuencia en muchos casos, de un nivel de precios en el mercado no acorde con la rentabilidad real de las explotaciones. El apego social hacia la propiedad de la tierra, junto con el refugio, en algunos casos, de capitales ajenos al sector, son factores que a nuestro entender influyen decisivamente. En este último caso y debido a la fuerte presión especulativa, sitúa el precio de la tierra como el más caro de Europa.

Ante esta situación el progresivo envejecimiento de la población activa agraria, tal y como contemplan los datos obtenidos comparando el Censo Agrario de 1989 y el de 1999, dan una idea de la involución sufrida en la Comunidad Valenciana, ya que en sólo 10 años se ha pasado de un porcentaje de titulares de explotaciones agrarias mayores de 55 años de un 56% a un 60%. A la vista de estos datos, el fracaso en la ejecución de las líneas como cese anticipado adquiere tintes más dramáticos, ya que desde su inicio en el año 1993 hasta el año 2001, únicamente se han acogido un total de 147 agricultores y ganaderos (el 1,4% del total estatal), situándose a la cola de las comunidades autónomas en este aspecto que en total, en ese periodo han tenido 10.491 beneficiarios.

Las medidas enfocadas a la incorporación de agricultores jóvenes ha padecido; además de una falta de presupuesto suficiente, una excesiva burocratización y una alarmante falta de información, algo aún más grave, una total falta de adaptación a la realidad de nuestro sector

agrario, tal y como muestran los datos del Censo Agrario ya que sólo un 6% de los titulares de explotación tienen menos de 35 años.

El grado de profesionalización es un índice que refleja la competitividad en cualquier sector económico. La media de mano de obra agraria a tiempo completo en las explotaciones se sitúa entre un 40-50% a nivel europeo. En la Comunidad Valenciana, y según datos de las encuestas de Estructuras Agrarias, se observa que no llegan al 20% las explotaciones agrarias en manos de agricultores profesionales. Consecuencia de la escasa dimensión de las explotaciones es el hecho de que se haya generalizado excesivamente la práctica de la agricultura a tiempo parcial, que actúa como sostén de la progresiva pérdida de renta real por ocupado en el sector.

A todas estas carencias estructurales, hay que añadir también otras como:

El elevado grado de desorganización y desvertebración de nuestros agricultores.

El bajo nivel de formación de los profesionales del campo y de los directivos de las entidades agrarias (cooperativas, SATs, Cajas Rurales, Comunidades de Regantes y otras).

La excesiva atomización comercial, continúa representando un obstáculo en la defensa de los precios percibidos por los agricultores.

La grave crisis financiera que afecta a miles de explotaciones y decenas de entidades asociativas. Esta situación de descapitalización generalizada de las explotaciones agravada por el endeudamiento consolidado, dificultan el acceso a mejoras tecnológicas por parte de los agricultores.

La degradación y fragilidad actual de los ecosistemas-agrosistemas y los increíbles, en algunos casos irresolubles problemas de sanidad vegetal y animal.

Todos estos puntos nos indican la grave situación por la que atraviesa el sector agrario de la Comunidad Valenciana y la necesidad de medidas urgentes para mejorar los condicionamientos que comportan falta de competitividad y rentabilidad.

En primer lugar se hace necesario la elaboración de un Plan Estratégico para el campo valenciano. Este Plan tendría el objetivo de definir una estrategia para el sector agrario valenciano, un marco de referencia para orientar la actividad agraria en función de la evolución de la Política Agraria Común, los acuerdos que se puedan llegar a tomar en el marco de la Organización Mundial de Comercio y la inminente ampliación de la Unión Europea.

Un Plan Estratégico que debería convertirse en el marco de futuro, adaptado a los nuevos retos y que recoja y dibuje un modelo propio de desarrollo y crecimiento, adaptado a nuestra realidad específica y diferenciada.

Un Plan que ha de ser respetuoso con las situaciones e intereses de todos, pero con un norte claro de preferencias y prioridades de acuerdo con un Modelo de Agricultura meramente valenciano.

Este modelo debe contemplar, sin querer ser exclusivos, una agricultura profesional. Una agricultura prioritariamente en manos de agricultores, con unas explotaciones de dimensiones razonables, viables desde el punto económico, financiero y empresarial, que permita la continuidad del modelo europeo de explotaciones familiares agrarias sostenibles.

Estos agricultores profesionales deberían tener una gran preparación técnica y empresarial, y la formación y profesionalidad necesarias para poder ser competitivos, sin ser agresivos con el medio ambiente.